

otras publicaciones:

**CORDOBAZO: CLASISMO,
DEMOCRACIA DE BASE Y
NUEVO MODELO SINDICAL**

Herramientas para la lucha y la organización - 2
Historia de las trabajadoras y los trabajadores



**Cordobazo: clasismo, democracia
de base y nuevo modelo sindical**

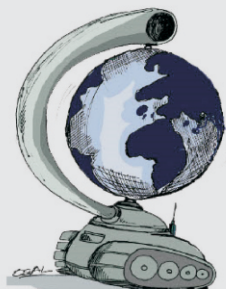
**FRENTE
POPULAR
DARIO
SANTILLAN**

cecso
centro de estudios
para el cambio social

Publicaciones del Centro
de Estudios para el
Cambio Social

Año 1. Número 1

Serie:
La Economía Política en Debate



La crisis del capitalismo neoliberal
y sus diversas manifestaciones

cecso
centro de estudios
para el cambio social

CECSO.ARGENTINA@GMAIL.COM
CECSODEARGENTINA.WORDPRESS.COM

serie:

Año 1 | Nº 1

APUNTES DE ECONOMÍA POLÍTICA

**EL PODER DEL CAPITAL COMO CAUSA DE LA
INFLACIÓN.**

**PAGO DE LA DEUDA: ¿SOBERANÍA O
DEPENDENCIA?**

**UN ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL
POR HIJO.**

**82% MÓVIL PARA LAS JUBILACIONES
MÍNIMAS. UN PASO NECESARIO
HACIA UN SISTEMA
PREVISIONAL MÁS JUSTO.**



cecso
centro de estudios
para el cambio social

¿Qué es el Centro de Estudios para el Cambio Social?

El **C**ENTRO DE **E**STUDIOS PARA EL **C**AMBIO **S**Ocial (**cecsos**) es una iniciativa que apunta a consolidar un espacio de construcción colectiva del conocimiento. Para ello impulsamos modalidades de intercambio y producción intelectual que buscan superar las reglas de la “academia” intentando generar el encuentro sistemático entre teoría y práctica, en la acción y el pensamiento, que no pueden ser más que dos facetas del propio proceso de cambio social al que queremos aportar.

¿Qué es el Equipo de Economistas Políticos?

Índice

2. El poder del capital como causa de la inflación.

6. Pago de la deuda: ¿S o b e r a n í a o dependencia?

11. Un análisis de la Asignación Universal por Hijo.

17. 82% móvil para las jubilaciones mínimas. Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo.

En el marco del **cecsos**, el Equipo de Economistas Políticos busca desarrollar análisis en torno a las condiciones producción material de la sociedad contemporánea y aportar elementos para sumar a los debates que se están desarrollando dentro de las construcciones colectivas que buscan superar los condicionamientos que las relaciones capitalistas de producción imponen hoy al desarrollo de una vida digna para los pueblos.

Presentación de la serie

Esta *Serie de Apuntes de Economía Política* es una publicación de periodicidad trimestral que intenta abordar de manera crítica algunos de los debates importantes de la coyuntura económica argentina. Deseamos que estos *Apuntes* sirvan como una herramienta que otorgue elementos para discutir y reflexionar colectivamente sobre la coyuntura. A su vez, esperamos que estos *Apuntes* sean el punto de partida para pensar alternativas populares y contra-hegemónicas para algunos de los temas de la agenda pública.

El poder del capital como causa de la inflación

La inflación resurgió como problema a partir de la salida de la convertibilidad. En los últimos años su efecto ha sido lisa y llanamente devaluar fuertemente los salarios de las trabajadoras y trabajadores. La política económica ha enfrentado el problema pero no sus fundamentos dando – por lo tanto – pobres resultados. La presente nota buscará plantear una explicación de las causas de la inflación. Luego, se realizará un análisis de las políticas gubernamentales ejecutadas en torno a la problemática, junto con una serie de propuestas de acción alternativas a las vigentes.

La salida de la convertibilidad trajo de vuelta un viejo conocido del pueblo trabajador: la inflación. Desde 2002 y hasta 2009 el aumento acumulado del conjunto de los precios de los bienes y servicios de consumo aumentó un 139,6%. Durante el primer gobierno kirchnerista (2003-2007) la inflación fue – en promedio – del 8,1% anual; durante el 2do gobierno (2008-2009) fue de 7,5% anual. Estos fueron los aumentos que



reconoció el INDEC, organismo oficial que tiene, entre otras tareas, medir la evolución de la inflación. Sabido es – claro está – que desde su intervención en 2007, las estimaciones del INDEC han sido fuertemente cuestionadas; se estima que la inflación real durante estos últimos 3 años ha sido – al menos – 40,9% más alta de lo que indican las estadísticas. En los últimos meses la inflación ha vuelto a retomar un lugar en la agenda de la mano de una aceleración en el aumento en los precios de ciertos productos básicos: alimentos y bebidas (en particular, la carne) y alquileres, entre otros. Con aumentos superiores al 40% en

algunos productos durante los primeros meses de 2010, de sostenerse la tendencia, la inflación

promedio estaría superando el 30% anual.

¿Qué es lo que impulsa la inflación del modelo?

Para entender el proceso actual no puede dejarse de lado el impacto que ha tenido la devaluación del peso en enero de 2002. El impacto del cambio en el precio del dólar fue muy significativo, en particular en los precios del conjunto de productos que compiten con importaciones (o son importados) y – fundamentalmente – aquellos productos que se exportan. Es decir, la devaluación permitió a las empresas productoras de alimentos, combustibles y productos de la industria manufacturera, aumentar sus precios. El resultado neto de ese proceso fue – luego de los primeros 12 meses – un aumento en el dólar de 248,1%, un salto en los precios de los alimentos de 57,9%, una caída en el poder de compra de los salarios de 23,7% (para el conjunto de los/as trabajadores/as) y un aumento del 122% en la participación de las ganancias empresariales respecto al ingreso total.

Frente al crecimiento de la inflación a partir de 2002, los/as trabajadores/as lograron – a través

de su lucha y organización – en una primera etapa recuperar parcialmente las pérdidas salariales. En efecto, entre 2002 y 2006 los salarios de los/as trabajadores/as aumentaron 88,6% en términos nominales y en promedio. Esto significó un incremento de 17% en términos reales. Si bien este aumento sólo les permitió recuperar algo de lo perdido desde la devaluación, las subas salariales aparecieron como el chivo expiatorio siendo acusados/as los/as trabajadores/as de ser los causantes de la inflación y exigiéndoles – con más fuerza a partir de 2006 – “moderación”.

Este argumento (que los salarios causan la inflación) desconoce algunos elementos importantes para señalar. La devaluación pulverizó el costo laboral y redujo el peso de los salarios en la estructura de costos de las empresas. En 2002 el costo laboral cayó 18%. Junto con el aumento significativo del resto de los costos, los precios y las ganancias, los salarios pasaron a representar sólo el 8,6% del valor bruto de producción (VBP) en las

grandes empresas, como promedio del período 2002-2007. En esas condiciones, un aumento de 25% en los salarios nominales sólo aumenta 2,5% los costos totales; si las ganancias empresariales y el resto de los costos no varían, ese aumento en “costos salariales” podría traducirse en un aumento en los precios de la misma proporción.

Entre 2002-2007, los costos laborales aumentaron sólo 1,7% en relación al VBP. Claro está, esto implica algo obvio pero usualmente dejado de lado: son las empresas – y no los/as trabajadores/as – quienes fijan los precios. En particular, son las grandes empresas productoras las “formadoras de precios”. Esto no quiere decir que esos grandes capitales pueden decidir unilateralmente los precios pero sí que ellas deciden a que precios venderán sus productos. Ellas pueden hacer esto porque poseen un poder significativo en sus respectivas ramas de producción.

El poder de estas empresas para fijar sus precios y – en el camino – sostener sus mega-ganancias, se ha incrementado en las últimas décadas. Esto se debe a la creciente concentración, centralización e internacionalización (extranjerización) del gran capital local. En 2007, el 20% de las empresas más grandes se apropian

de más del 75% de las ganancias de la cúpula capitalista (500 empresas de mayores ventas) y más del 80% eran empresas extranjeras.

Este proceso les ha permitido incrementar fuertemente la rentabilidad estructural: en los noventa (1995-1998) tenían una tasa de ganancia del 13,2%, mientras que en la etapa actual (2002-2007) la tasa de ganancia es en promedio 19%. Ese poder les ha permitido a los grandes capitales mantener firme su rentabilidad desde 2002 y una masa de ganancias siempre creciente hasta 2007 (y seguramente en los últimos dos años). Esto sólo significa una cosa: la inflación es causada por la presión de los grandes sectores del capital para sostener sus niveles de rentabilidad.

La etapa actual se caracteriza por un recrudecimiento de la inflación, que ha sido reconocido por el INDEC. La inflación real ha promediado el 21% anual en los últimos tres años, mientras que la tendencia de los primeros meses de 2010 marca un salto adicional.

En este contexto, la eficacia de la política de contención salarial – mediada por las burocracias sindicales – resultó en el fin de la recuperación de los salarios reales. En 2008 y 2009 los trabajadores/as vieron estancarse el poder de

compra de sus salarios. Los salarios nominales promedio crecieron apenas por encima de la inflación real de la etapa; los salarios de los/as trabajadores/as estatales lo hicieron muy por debajo.

Habiendo perdido cualquier sustento la hipótesis dominante de la inflación por presión salarial (que ya habíamos descartado), comienza a tomar preeminencia la visión de que la misma es causada por el descontrol de los gastos públicos y la emisión de dinero. Esto último es negado rápidamente con un solo dato: la cantidad de dinero ha crecido en los últimos años menos que el PBI, reduciendo su relación de 13,43% en 2007 a sólo 13,05% en 2009. En lo que respecta al gasto público, vemos que si bien aumentó en relación con el PBI nominal, el gasto del sector público nacional fue en 2007-2008 más bajo que en los años anteriores (2002-2006). Vista la evidencia, es clara la intención de los sectores dominantes y sus representantes: acotar los márgenes de libertad del Estado (control del Banco Central) y realizar un ajuste de gastos que permita pagar los crecientes pagos de intereses y capital de la deuda externa, que en 2010 son el rubro del gasto presupuestado que más crece.

Dicho esto ¿qué explica el

recrudecimiento de la inflación? Un primer elemento es la recuperación en el precio de algunos productos de exportación significativos para la Argentina. La el poroto de soja aumentó 32% desde comienzos de 2007, el aceite de girasol 64%, carne bovina 16% (25% en el último año), el petróleo 37%. Esto presiona sobre los costos y los grandes capitales – con su voluntad de ganar a toda costa – los trasladan a los precios. Aprovechan para esto el “colchón” que les provee la devaluación del peso que desde 2006 superó el 24%.

El segundo elemento parece ser la voluntad de los grandes capitales de recuperar la pérdida de competitividad que enfrentan desde 2003. En efecto, su propia estrategia de protección de sus ganancias por medio de la inflación ha deteriorado el tipo de cambio real porque el dólar ha aumentado mucho menos que los precios internos. En esta etapa de crisis económica, la presión sobre la rentabilidad se incrementa. Frente a la necesidad de acelerar la acumulación de capital, las grandes empresas recuperan la “iniciativa” buscando devaluar los salarios a través de la inflación para aumentar sus ganancias.

Pago de la deuda: ¿Soberanía o dependencia?

La discusión sobre la deuda pública pareciera reducirse a encontrar la mejor forma de pago. El oficialismo defiende su política de canje y pago con reservas del Banco Central. La oposición por derecha al kirchnerismo, destaca permanentemente la necesidad de reducir el gasto público para pagar con “recursos genuinos”. A excepción de la posición de Proyecto Sur -minimizada por los medios masivos de comunicación-,

parecieran no existir alternativas en el debate: el pago de la deuda es indiscutiblemente positivo.

En el presente artículo nos proponemos evaluar críticamente cuáles son los fundamentos estructurales de la deuda pública y, a su vez, analizaremos su evolución desde la Dictadura Cívico-Militar a esta parte para finalmente ingresar en el actual debate sobre el canje que llevó a cabo el gobierno por en los últimos meses.

Deuda y dependencia: dos caras de una misma moneda

En primer lugar, debemos destacar el rol histórico que ha jugado la deuda pública externa como forma de subordinar la dinámica económica de los países del Tercer Mundo al desarrollo capitalista de los países centrales. A través de diversos mecanismos, las potencias imperiales –primero Inglaterra y más tarde Estados Unidos- han realizado préstamos a los países sub-desarrollados insertándolos en la lógica del capital global.

En cada período, los excesos de



liquidez del centro se tradujeron en fondos prestables para las clases dominantes y los gobiernos de los países periféricos, con sus

consecuencias en términos de condicionamientos para los Estados nacionales para llevar a cabo una política autónoma.

Estos mecanismos de préstamos fueron particularmente importantes en la Segunda Posguerra, momento en el cual Estados Unidos toma el rol de potencia hegemónica y de representante del capitalismo global. Los diferentes organismos multilaterales –Banco Mundial, FMI, entre otros- creados en el acuerdo de Bretton Woods, no hicieron más que fortalecer la posición imperial del país del norte, otorgando una mayor legitimidad a sus acciones. En cada uno de estos organismos los países ricos poseen un derecho de voto muy superior al de los países atrasados, asegurando la adecuación de su funcionamiento a los intereses de estos Estados y, por su intermedio, de sus clases dominantes. Aún en 2008, Estados Unidos contaba con el 18% del derecho a voto en el directorio del Banco Mundial y un 17% en el FMI, mientras que Japón –segunda potencia en el directorio- posee sólo un 6%.

Estas posiciones desiguales en los organismos –encargados, supuestamente, de velar por la regulación de las actividades financieras a nivel global-, junto con

las capacidades productivas diferenciales de los países centrales, tuvieron como consecuencia el incremento del endeudamiento de los países eufemísticamente llamados “en desarrollo”. Esto se hace muy claro especialmente luego del giro neoliberal de los '70: el stock de deuda externa en los países del Tercer Mundo pasó de 540.000 millones de dólares en 1980 a 3.360.000 millones en 2007 –una variación del 522%. Otro tanto representan los servicios de esta deuda: pasaron de 86.000 millones de dólares en 1980 a 523.000 millones en 2007. Aproximadamente la mitad de esta deuda externa es pública, es decir unos 1.680.000 millones de dólares en 2007. En los países centrales, por el contrario, en ese año la deuda externa pública sólo alcanzó los 105.700 millones de dólares. Conclusión: los países del sur poseen una deuda pública externa 16 veces superior a la de los países centrales y economías evidentemente más pequeñas.

Del stock de deuda externa pública de los países del sur, Nuestra América poseía –en promedio- 79.000 millones en el año 2007. Argentina, a pesar de los diagnósticos positivos del oficialismo, se encontraba aún en

2007 en el quinto lugar de los países más endeudados a largo plazo detrás de México, Brasil, Turquía e Indonesia. Lo más perverso de la cuestión es que aún cuando no se tome nueva deuda, los intereses y servicios de la deuda acumulada previamente, incrementan por sí mismos los montos adeudados. Cada vez que los diferentes gobiernos del sur refrendan los pagos de intereses –o renegocian

los vencimientos de capital– en sus presupuestos públicos, no hacen más que permitir que el capital excedente del centro se destine a una “inversión” confiable y duradera: el endeudamiento público de los países del sur. Así, a nuestros pueblos se les exige destinar parte del valor socialmente producido cada año a asegurar la rentabilidad de los flujos de capital que provienen del norte.

La deuda argentina y el nuevo canje: ¿no hay alternativas?

Hasta aquí hemos visto, que el mundo –y en particular la “periferia”– ha sido testigo de un proceso acelerado de endeudamiento de los Estados nacionales y de expansión del capital financiero. Argentina no ha sido la excepción a este proceso. Veamos la evolución de la Deuda Pública para luego centrarnos en la discusión del mentado Canje que está instrumentando el gobierno desde hace unos meses.

El primer gran incremento de la deuda pública fue durante la última dictadura, cuando a través de la “bicicleta financiera” y la estatización de deuda privada pasó de 9.700 a 45.100 millones de dólares entre 1976 y 1983. Durante

los gobiernos constitucionales posteriores, el stock de deuda continuó incrementándose, sobre todo en el período de vigencia de la convertibilidad, en el cual se pasó de 57.000 millones de dólares en 1990 a 144.000 millones de dólares hacia fines de 2001. Con la salida de la crisis de la convertibilidad, la deuda pública argentina continuó aumentando durante el período 2002-2009. De esta manera, y muy a pesar del mentado canje de deuda del 2005 y los cuantiosos pagos en efectivo al FMI y acreedores privados, hacia fines de 2009 la deuda pública del Estado Nacional trepó a los 147.000 millones de dólares, valores todavía mayores que los valores de 2001 y 44%

superior al promedio de toda la etapa 1992-2001.

Evidentemente, los pagos y renegociaciones de la deuda pública no han permitido reducirla de manera significativa y los mecanismos que la generaron siguen operando y recreando un amplio espacio para la valorización del capital financiero. Es decir, los títulos públicos continúan funcionando como formas de inversión de alta rentabilidad y relativo bajo riesgo.

Si bien en la etapa actual la proporción de endeudamiento en manos de “extranjeros” se redujo al igual que la proporción de deuda sobre el PBI, la deuda pública continúa siendo un condicionante privilegiado de la política económica. A través del Estado, el capital financiero internacional se apropia de casi 10% de la riqueza total generada anualmente en el país. A pesar de haber pagado la deuda con el FMI, el peso global de la deuda pública en la economía nacional mantiene al capital financiero en condiciones de seguir direccionando –a favor del conjunto del capital – la orientación general de las políticas públicas.

A partir de este estado de situación surge una pregunta central: ¿por qué la deuda sigue siendo un problema para la

Argentina? Luego de años de alto crecimiento y tasas de rentabilidad elevadas para el capital (superiores a las vigentes en los noventa), con una situación fiscal mucho más holgada que en otras épocas y un ingreso excedente de dólares para el conjunto de la economía. ¿Por qué el Estado Nacional decide hoy retomar la negociación con los acreedores (antes llamados “buitres”) y refrendar ese endeudamiento con el fin declarado de “volver a insertarse en el mundo” o de “tomar nueva deuda a menores tasas”?

En primer lugar, el canje planteado por el ministro de economía es una decisión que beneficia a aquellos acreedores que se auto-excluyeron del canje de 2005. Los bonistas y bancos de inversión que quedaron afuera apostaron a esperar que el gobierno argentino retomara el ciclo del endeudamiento. El canje de 2010 privilegia la rentabilidad de los bonistas, reconociendo una deuda de al menos 10.000 millones de dólares, que no existía por decisión soberana del Estado argentino. El reconocimiento por parte del gobierno de que los especuladores –paradigmas de lo más rancio del capital financiero– tienen razón en reclamar el pago de sus acreencias difícilmente pueda defenderse

como un acto de soberanía popular.

En segundo lugar, existe un mejor destino para los ingresos fiscales que el pago que año a año se lleva la deuda pública. De acuerdo al presupuesto nacional, en 2010 el Estado nacional destinará al pago de intereses un 9,7% del gasto público planeado para este año. Si lo comparamos con el 3,7% que se destina a salud y el 7,2% que se asigna a educación y cultura queda en claro cuáles son las prioridades más allá de los discursos grandilocuentes. En otras palabras, si no se pagara este monto de intereses, se podría -por ejemplo- cuadruplicar la cantidad de viviendas populares que se prevén construir durante este año.

Tercero, los salarios de las y los trabajadores del sector público se encuentran aún hoy muy por debajo de sus niveles de 2001. Sin embargo, el incremento salarial estipulado en el presupuesto no

permite siquiera una recomposición por la inflación.

Cuarto, la necesidad de sostener y aumentar el endeudamiento para financiar la actividad del Estado es una opción política anti-popular, claramente inferior a otras alternativas. Con un sistema tributario regresivo como el actual, los/as trabajadores/as pagan con su esfuerzo a los más ricos acreedores del Estado.

Una política alternativa implicaría, al menos, tres medidas: (a) Constituir una Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública -tal como se ha hecho recientemente en Ecuador- que declare el endeudamiento ilegítimo e ilegal, (b) eliminar los subsidios al gran capital y (c) aumentar la carga impositiva sobre los sectores con mayor capacidad contributiva para terminar con la “necesidad” de hacer uso del endeudamiento.

Un análisis de la Asignación Universal por Hijo

A fines del año pasado, el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), respondiendo a una demanda impulsada por diversos sectores de la sociedad, desde hace más de una década. El consenso acerca de los resultados positivos de la medida, impone la necesidad de discutir su

consagración como derecho, más allá de los gobiernos por venir. El presente artículo nos proponemos, en primer lugar, evaluar críticamente los fundamentos que existen detrás de la Asignación. En segundo lugar, debatiremos cuestiones específicas de su implementación, de cara a su sostenimiento en el tiempo.

El carácter permanente de las demandas populares

A fines del año pasado, el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), respondiendo a una demanda impulsada por diversos sectores de la sociedad, desde hace más de una década. El consenso acerca de los resultados positivos de la medida, impone la necesidad de discutir su consagración como derecho, más allá de los gobiernos por venir. El presente artículo se dividirá en dos partes, en primer lugar nos proponemos evaluar críticamente los fundamentos que existen detrás de la Asignación. En la segunda entrega, debatiremos cuestiones específicas de su



implementación, de cara a su sostenimiento en el tiempo.

El Decreto que promulgó la AUH, sostiene que la solución estructural de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de “trabajo decente”. De esta manera,

la Asignación se entiende como una medida temporaria, hasta tanto tasas sostenidas de crecimiento resuelvan de manera concluyente las condiciones de pobreza y precariedad en la que vive buena parte de la sociedad. En definitiva,

se vuelve necesario discutir los postulados que existen detrás de la implementación de la medida, los cuales precisan un determinado funcionamiento del mercado de trabajo en particular, y de la economía en general.

La economía política de la asignación por hijo

La lectura post-keynesiana del funcionamiento económico -afín al diagnóstico gubernamental-, sostiene la existencia de un problema de demanda efectiva insuficiente, es decir, insuficientes niveles de inversión pública, privada y/o exportaciones, implican exiguas oportunidades de empleo y, a su vez, generación de empleos de baja calidad.

Siguiendo esta línea argumental, la actual política económica se serviría de un equilibrio macroeconómico orientado básicamente a la resolución del problema del desempleo: un tipo de cambio real elevado y estable permitiría aumentar la inversión y el empleo en las actividades comercializables internacionalmente (transables), lo cual mejoraría la distribución del ingreso y disminuiría los niveles de pobreza. De esta manera, la ampliación de la demanda de trabajo de la economía –reducción

del desempleo-, implicaría iniciar una trayectoria con “trabajo decente”, es decir, empleos registrados y bien remunerados.

La pregunta que aquí se plantea tiene que ver con los plazos necesarios para que se produzca este proceso auspicioso del devenir económico. Habiendo transitado el proceso de valorización del capital más exitoso de la historia económica reciente (2003-2008), con tasas de crecimiento promedio del PBI mayores al 8% anual, ¿cómo se entienden los sostenidos niveles de desocupación y subocupación que mantienen al 20% de la población económicamente activa con problemas laborales? ¿Cuándo podrán resolverse las condiciones de desprotección, inseguridad y abuso con las que convive uno de cada dos trabajadores producto de su ocupación informal? En definitiva, nos cuestionamos cuáles son los niveles de crecimiento, y durante cuánto tiempo, para que se

cumpla el mencionado postulado gubernamental.

A nuestro entender, la imposibilidad parte de las características productivas de la economía capitalista periférica. En una economía dominada por el capital, tanto la dinámica del empleo de la fuerza de trabajo como las condiciones de contratación estarán ligadas a su “deber ser”: la generación de un excedente económico (plusvalor) por medio de la apropiación privada de una porción del valor socialmente creado.

En la etapa de auge del ciclo económico, el incremento del capital implicará aumentos en el empleo (masa de trabajo vivo) aplicado al proceso de producción. A medida que el trabajo se vuelve escaso, se hace cada vez más difícil extraer plusvalor a los trabajadores/as. Por tanto, el ritmo de crecimiento del producto y del empleo caerá, mientras que mediante tendencias opuestas como incrementos en la productividad de la fuerza de trabajo, precarización laboral e incluso despidos de trabajadores/as, se restablecerá

una relación “adecuada” entre el capital y la población relativamente sobrante.

En consecuencia, el desempleo y la precarización de la vida -ampliada sustancialmente durante la década pasada y estructuralmente presente en la actualidad-, son funcionales al proceso de acumulación ya que actúan como instrumentos disciplinadores de la fuerza de trabajo, claves en la generación de plusvalor y, por tanto, ganancia.

El capitalismo, sin embargo, da lugar a una serie de tendencias antagónicas. Aunque las clases dominantes busquen aumentar los niveles de explotación hasta sus límites históricos y sociales, las clases subalternas resistirán esos intentos al punto de dar pelea contra las condiciones sociales que hacen necesaria esa lucha. La pugna por una asignación universal de carácter permanente, consagrada como derecho, se inscribirá como una reivindicación más de los sectores populares organizados, en el marco de un objetivo más amplio que involucra la recomposición de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Defenderla para transformarla

En este punto, habiendo discutido los postulados que justificaron la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre del año pasado y por qué debe ser consagrada como un derecho de carácter permanente, pretendemos centrar el debate sobre algunas modificaciones necesarias para encaminarnos en esa senda y lograr que se profundicen los efectos positivos de las 3.7 millones de asignaciones, que permitieron bajar la pobreza en alrededor de un 13% y la indigencia en más de un 50%.

Un primer elemento para debatir es el carácter “universal” de la medida. Nos parece relevante dejar claro que aunque es un plan de amplia cobertura, identifica una población “objetivo”, es decir, hace un recorte donde estarán en condiciones de recibir el subsidio los hijos de desocupados, trabajadores informales que cobren menos del salario mínimo, vital y móvil (que en la actualidad es de \$1500) y monotributistas sociales. Los planes sociales focalizados se multiplicaron durante la década de los noventa, ya que forman parte del cuerpo teórico de la teoría neoliberal donde los perdedores del modelo económico deben ser

socorridos a partir de la política social, quedando (la mayor parte de las veces) al margen de las consideraciones de la política económica. Entendemos que esta es una tendencia a revertir para aspirar a la consolidación de la AUH como un derecho de todos los niños y niñas menores de 18 años más allá del sector social al que pertenezcan y dejar de entenderla como un auxilio para los sectores sociales excluidos.

Muchas veces la discusión de la universalización viene atada al “congelamiento” de la distribución del ingreso y a la problemática fiscal. En primer lugar, es el sistema tributario (claramente regresivo) el que debe entrar en la discusión de la desigualdad del ingreso, por sus posibilidades para corregirla y por ser un elemento primordial para discutir la problemática fiscal. Los economistas que señalan que una asignación universal significa congelar la distribución del ingreso están haciendo una omisión no menor: dejan fuera del análisis que en el cobro de los impuestos destinados a financiarla pagan relativamente más los que menos tienen. Si, por ejemplo, se pensara en afectar un impuesto de carácter progresivo al pago de la asignación,

entonces se obtendría una mejora neta en la distribución del ingreso.

En segundo lugar, no se ha dicho todo acerca del costo fiscal de la AUH. El gobierno afectó originalmente \$9.965 millones de pesos al financiamiento del plan. Sin embargo, un requisito no menor para acceder al mismo, es no cobrar otro plan social. Si analizamos exclusivamente los planes de empleo (Plan Jefes y Jefas de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo, y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, entre otros) encontramos resultados concluyentes. En octubre del año pasado, existían 1.056.866 planes de empleo; a partir de allí se da una importante y veloz reducción, al punto que en marzo pasado sólo quedaban 556.642 (según datos del Ministerio de Trabajo). Esta caída implica un ahorro para el Estado estimado en \$3000 millones (de acuerdo a la Consultora SEL), es decir, una tercera parte de lo previsto para la medida. Por lo tanto, el reemplazo de planes que poseen un monto de beneficio menor por la AUH, implicaría nuevas posibilidades para garantizar la real universalización.

En tercer lugar, la Asignación ha visto reducido su efecto positivo a medida que la inflación ha disminuido el poder de consumo de

la misma. No es noticia el incremento de precios en nuestro país y tampoco es menos conocido que el impacto se da fuertemente sobre alimentos. Si suponemos que el consumo adicional de los sectores populares producto de la asignación, mayoritariamente recae en este rubro, encontramos que la desvalorización (a octubre de este año) será probablemente superior al 30%. Es decir, en los próximos tres meses, ya no se podrá consumir una tercera parte de lo que se compraba adicionalmente al comienzo del plan.

Esta problemática requiere, nuevamente, una doble discusión. Por un lado, consideramos que deben instrumentarse métodos automáticos de actualización del poder adquisitivo y que no sean de carácter discrecional. En la actualidad, es el Poder Ejecutivo Nacional quien tiene la potestad de actualizar el monto de la AUH y por lo tanto, seguirá los vaivenes del ciclo electoral. Una reglamentación del decreto que establezca la actualización de la AUH mediante un índice que contemple la inflación en alimentos, permitiría dar un paso más hacia su institucionalización y, por tanto, su consagración como derecho. Por otro lado, el monto a actualizar debe partir como mínimo de la

mejora adicional que implicó la medida: no olvidemos que para una familia tipo con dos hijos, la AUH (\$360) llegó a cubrir sólo un 37% de la Canasta Básica de Alimentos (\$963, de acuerdo a datos de la Consultora SEL). Entendemos que este porcentaje de cobertura es un piso que no se puede vencer.

Los párrafos anteriores

pretenden incorporar al debate algunos puntos que consideramos relevantes a la hora de discutir cómo profundizar (y en algunos casos mantener) los impactos positivos de la medida. Desde nuestro lugar, entendemos que debe defenderse para luego, transformarse.

82% móvil para las jubilaciones mínimas. Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo.

En las últimas semanas, el gobierno y parte de la oposición vienen sosteniendo un fuerte debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Bandera justa en manos -en su mayoría- cuestionables. Entre otros, la discusión enfrenta a

muchos de quienes que rebajaron el 13% a los jubilados y a todo el gasto social en el 2001, y a otros que, ahora en el gobierno, dicen que esta reivindicación histórica -un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas- es una medida “irresponsable”.

Historia de un sistema en crisis permanente

En su origen, los sistemas de previsión social (jubilaciones, pensiones) surgieron como respuesta de los propios trabajadores y trabajadoras. Sindicatos, mutuales y otras formas de auto-organización obrera conformaron las primeras “cajas de previsión” en los albores del siglo XX. Con el ascenso del movimiento obrero, en los primeros años del peronismo, el sistema mutó hacia una forma estatal y crecientemente centralizada. En sus inicios, los pagos del sistema fueron financiados por aportes que los propios trabajadores y trabajadoras hacían de sus salarios, más los



aportes que los empresarios fueron forzados a realizar por las luchas obreras. Con la estatización de la política de seguridad social, este régimen de financiamiento continuó y poco a poco se consolidó. El 82% móvil para las jubilaciones se estableció como criterio de base en el marco de esta

consolidación. Progresivamente, el sistema de seguridad social fue incorporando otras responsabilidades bajo su órbita, como las asignaciones familiares - para los trabajadores y trabajadoras con empleo formal - y recientemente, los beneficiarios de las asignaciones “universales” por hijo/a (AUH).

Hasta mediados de los años setenta, el sistema de previsión funcionó sobre esta base, aunque sus contradicciones crecían. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y la tendencia de deterioro en los niveles de salarios se profundizó con la dictadura de 1976. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales provenientes de otros impuestos para financiar las jubilaciones y pensiones.

En los 90, la creación del sistema de AFJPs, la reducción de los aportes patronales y el elevado empleo en negro aumentaron la presión sobre

las finanzas del sistema de previsión social (en cabeza del ANSES). La re-estatización total del sistema en 2008 compensó sólo parcialmente el problema; sin embargo permanecen aún hoy vigentes dos cuestiones clave de los noventa: el impacto del empleo en negro (cercano al 40%) y la reducción de los aportes patronales. En los últimos años, la expansión en la base de beneficiarios no contributivos y de la AUH aumentaron las erogaciones sin incorporar nuevas fuentes de financiamiento.

El resultado de este proceso de largo alcance fue que las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios (aún cuando los salarios han caído también fuertemente en estos últimos 35 años). Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio, mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos (equivalentes al 31% del salario promedio: menos de novecientos pesos). Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos ingresos los mantienen al límite de la pobreza.

¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse?

La demanda histórica del 82% móvil para las jubilaciones se basa en el criterio de garantizar que el nivel de vida de las personas no se reduzca con el fin de su vida activa en el mercado laboral. En la situación actual, la primera medida posible para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Si bien históricamente ha permanecido en crisis financiera, hoy el ANSES tiene superávit cercano a los 10 mil millones de pesos fundamentalmente sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. Esos recursos permitirían aumentar un 20% de manera inmediata los beneficios para jubilados y pensionados.

En segundo lugar, la recaudación del ANSES en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. Como mencionamos antes, para 4 de cada 10 trabajadores/as los patrones no realizan aportes a la seguridad social. La inclusión de estos trabajadores y trabajadoras al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso adicional promedio

para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja implementada en los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo su aumento para el conjunto de las grandes empresas, cuyas ganancias en los últimos años han superado ampliamente las que obtuvieron en los noventa.

Sólo estas dos medidas permitirían en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo. Sería un buen primer paso. A partir de allí pueden empezar a pensarse medidas adicionales de recaudación de impuestos y eliminación de subsidios para recomponer los ingresos del sistema de seguridad social y configurarlo como un sistema universal de garantía de ingresos.

En este sentido, un primer paso sería afectar un porcentaje de la recaudación en concepto de retenciones a la seguridad social. Actualmente casi la mitad de los pagos de jubilaciones se realiza con la recaudación de impuestos (IVA, Ganancias, Impuestos personales y

al cheque, entre otros), pero las retenciones a las exportaciones (que representan un ingreso al fisco de 33 mil millones de pesos) no se utilizan con este fin. Si, por ejemplo, se destinara un 25% de estos ingresos a financiar los aumentos de las jubilaciones mínimas se lograría cubrir el 82% móvil para la mitad de los jubilados.

Además, podrían empezarse a imponer retenciones a las exportaciones mineras, incrementar las alícuotas del impuesto a las ganancias de las grandes empresas y grandes propietarios, la reimposición del impuesto a la herencia y a las ganancias financieras y el ajuste progresivo en los impuestos a la propiedad inmobiliaria.

El problema de la seguridad social hoy no es –como señalan los sectores más conservadores- que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni –como sostiene el kirchnerismo- la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.